



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-007-2020-00422-01
Demandante:	Adriana María Escobar Tobón
Demandado:	Colpensiones y Protección S.A.
Asunto:	Apelación y Consulta
Procedencia:	Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, junio diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de Consulta, en favor de dicha entidad, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de enero del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora ADRIANA MARÍA ESCOBAR TOBÓN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., Radicado 05001-31-05-007-2020-00422-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora ADRIANA MARÍA ESCOBAR TOBÓN, convocó a juicio a COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare que Protección S.A. la engañó con el fin de trasladarla a dicha administradora, declarando la ineficacia del traslado a Protección S.A., ordenando a Colpensiones, la inmersión en el Régimen de Prima Media, sin solución de continuidad y a Protección S.A. trasladar a Colpensiones el 100% de las cotizaciones, bonos, rendimientos, pagando de su patrimonio los dineros que tenían como fin el pago del fondo de garantía de pensión mínima, gastos de administración, primas de reaseguro de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y muerte; a la vez se condene a Colpensiones a recibir todos los conceptos a los que hubiere lugar.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que la demandante nació el 17 de septiembre de 1966, a partir de agosto de 1997, debido a un escueto asesoramiento, efectuó traslado a Protección S.A., sin explicársele las características del régimen al cual se pretendía trasladar, ni la forma en la que se le reconocería la eventual pensión, ni mucho menos, las ventajas y desventajas de la decisión que iba a tomar.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la edad de la demandante y lo

relacionado con el traslado a Protección S.A., sin constarle los demás hechos de la demanda, por ser ajenos a su representada.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir; buena fe; prescripción; imposibilidad de condena en costas y la innominada o genérica.

Finalmente, **PROTECCIÓN S.A.** dio respuesta al libelo genitor, indicando que la actora fue visitada por el ejecutivo de la AFP, quien la asesoró de manera objetiva, íntegra, clara y responsable sobre las características de ambos regímenes, así como las diferencias de los mismos, suministrando una información adecuada, suficiente, clara, comprensible, detallada, precisa, cierta y comprensible, pues los asesores de la administradora son capacitados permanentemente y cuentan con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados.

Presentó las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP; inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe; la innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 20 de enero del año 2022, el Juzgado de conocimiento declaró la ineficacia del traslado efectuado por la actora a Protección S.A., en agosto de 1997; declaró que la demandante se encuentra válidamente afiliada a Colpensiones, sin solución de continuidad; condenó a

Protección S.A. a trasladar a Colpensiones, los montos existentes en la cuenta de ahorro individual de la demandante y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima con sus respectivos rendimientos, exceptuando los dineros destinados al pago de cuotas de administración y primas de seguros previsionales para los riesgos de invalidez y muerte, aquellos dineros deberán ser trasladados dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia; condenó a Colpensiones a validar la afiliación de la demandante y a recibir los dineros, además de tener en cuenta el tiempo cotizado por la actora en el Régimen de Ahorro Individual, como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral, condenando en costas a Protección S.A.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Colpensiones

La apoderada de la entidad interpuso recurso de apelación, solicitando que, de considerarse procedente la declaratoria de ineficacia de la afiliación, se modifique la providencia en el sentido de ordenar a Protección S.A., trasladar a Colpensiones el 100% de las cotizaciones realizadas por la demandante, sin descuento alguno, esto es, que además de los aportes y rendimientos, traslade el valor de los gastos de administración y cuotas de seguros previsionales.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de Colpensiones, solicitando se tenga en cuenta que no solo las obligaciones recaen en cabeza de las administradoras, sino que el demandante debió mostrar cierta diligencia, en el sentido de informarse sobre las condiciones del régimen al cual pretendía trasladarse, reiterando lo indicado en su recurso de apelación, respecto de los conceptos que deben ser trasladados por Protección S.A., en caso de confirmarse la declaratoria de la ineficacia del traslado, sumas que deberán retornar de manera indexada.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora Adriana María Escobar Tobón nació el 17 de septiembre de 1966, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante en el documento *03 Escrito DDA Adriana M Escobar Tobón folio 21* del plenario.
- Que la actora se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A. el 20 de agosto de 1997, con fecha de efectividad el 1º de octubre de 1997 y a ING Santander hoy Protección S.A., el 14 de febrero del 2007, con fecha de efectividad el 1º de abril del 2007, de

conformidad con los formularios de afiliación obrantes en el documento *03 Escrito DDA Adriana M Escobar Tobón folios 31 y 33* del plenario.

- Que la accionante acredita un total de 1388.14 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por la AFP Protección S.A. el 25 de noviembre del 2020, obrante en el documento *03 Escrito DDA Adriana M Escobar Tobón folios 35 a 50* del plenario.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala si:

¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta, proferida en el presente proceso por la señora Juez Séptima Laboral del Circuito de Medellín, determinando si es ineficaz la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Protección S.A., efectuado por la demandante?

¿Si como consecuencia de la ineficacia, debe ordenarse a Protección S.A., el traslado de los aportes al Fondo de Garantía Mínima, las cuotas de administración y los seguros previsionales?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto de afiliación por incumplimiento del deber de información y por lo tanto debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, en consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA PARCIALMENTE en el numeral tercero, para ordenar a PROTECCIÓN S.A., el traslado a Colpensiones de las comisiones de administración y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante; así mismo se

ADICIONA el numeral tercero, en el sentido de condenar a Protección S.A, a trasladar las comisiones de administración, las cuotas de los seguros previsionales y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, de manera indexada.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad

opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de

Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021 y más recientemente en las sentencias SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022 y SL1637 del 11 de mayo de 2022, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece la afiliación de la señora Adriana María Escobar Tobón, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A. el 20 de agosto de 1997, con fecha de efectividad el 1° de octubre de 1997 y a ING Santander hoy Protección S.A., el 14 de febrero del 2007, con fecha de efectividad el 1° de abril del 2007, de conformidad con los formularios de afiliación obrantes en el documento *03 Escrito DDA Adriana M Escobar Tobón folios 31 y 33* del plenario, no obstante, los formularios de afiliación no dan cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad de la afiliación en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Del interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó que para cuando se dio el traslado a Protección S.A., laboraba en una firma llamada Mejía Acevedo, allí se

reunieron por ahí 30 o 40 personas, les dijeron que el ISS se iba a acabar, que el dinero y las semanas se perderían, que por eso lo mejor era pasarse al fondo que era más rentable, que lo que importaba era el capital que tuvieran, sin importar la edad; luego se trasladó a la AFP Santander, cuando entró a laborar a otra oficina, no recuerda bien como se dio el traslado; quiere retornar a Colpensiones por el valor de su mesada pensional y porque si le hubieran dado la información completa, ella habría podido tomar una mejor decisión; actualmente no está cotizando.

De lo anterior se advierte que, si bien la demandante se trasladó de manera libre y voluntaria, el traslado lo hizo sin haber recibido la información clara y suficiente que le permitiera tomar la decisión.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones de su afiliación.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó Protección S.A. a la demandante, al momento de efectuarse la afiliación, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte

completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante,

deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de aborro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

Criterio reafirmado en la sentencia SL 3034 de 2021, en la cual sobre el punto se indicó:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta,

se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

Colofón de lo anterior, la orden de traslado impartida por la falladora primaria, se encuentra parcialmente ajustada a los anteriores criterios, por lo tanto, debe REVOCARSE PARCIALMENTE en el numeral tercero, para ordenar a PROTECCIÓN S.A., el traslado a Colpensiones de las comisiones de administración y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, conforme lo solicitado por la apoderada de Colpensiones en el recurso de alzada.

Adicional a lo expuesto y atendiendo, a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de las cuotas de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, es un efecto propio de la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, bajo la égida de la consulta, se ordenará la indexación de las referidas sumas, es procedente ADICIONAR el numeral tercero, en el sentido de condenar a Protección S.A, a trasladar las comisiones de administración, las cuotas de los seguros previsionales y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, de manera indexada.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **REVOCA PARCIALMENTE** el numeral tercero de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral de Circuito de Medellín, el 20 de enero del 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora ADRIANA MARÍA ESCOBAR TOBÓN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en cuanto excluyó de los conceptos a trasladar las comisiones de administración y las cuotas por seguros previsionales y en su lugar se ordena a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES dichos conceptos, los cuales afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante. Así mismo se ADICIONA el numeral tercero, en el sentido de condenar a Protección S.A, a trasladar las comisiones de administración, las cuotas de los seguros previsionales y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, de manera indexada.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia referida en los demás numerales.

3.- Sin costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO